



## **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

Acta n.º 45

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** CARLOS HUMBERTO PEÑA AGUDELO  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**Procedencia:** JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Radicado n.º:** 05001-31-05-010-2017-00702-01 (20-047)

En Medellín, a los trece (13) días del mes de julio de dos mil veinte (2020), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo No 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, en su carácter de sustanciador, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**, una vez discutido y aprobado el respectivo proyecto de sentencia, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dentro del proceso ordinario instaurado por **CARLOS HUMBERTO PEÑA AGUDELO** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, radicado bajo el n.º 05001-31-05-010-2017-00702-01 (20-047).

Preside la presente **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, en calidad de magistrado ponente. Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente, **SENTENCIA**:

### **1. ANTECEDENTES**

El señor CARLOS HUMBERTO PEÑA AGUDELO, actuando a través de apoderado judicial instauró demanda en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, los intereses moratorios y/o la indexación, y las costas del proceso, con fundamento en que el 2 de febrero de 2017, fue calificado con una PCL del 53,06 % de origen común y estructurada el 27 de diciembre de 2016, por lo cual solicitó la pensión de invalidez el 1º de marzo de 2017, misma que fue negada mediante Resolución SUB 23015 del 30 de marzo de 2017, por no contar con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez, ni 26 semanas dentro

del año inmediatamente anterior, y por no tratarse de una enfermedad progresiva. Añade que cuenta con 525,28 semanas cotizadas antes del 1º de abril de 1994.

La demanda fue admitida mediante auto del 16 de agosto de 2017 (fol. 27), y una vez notificada, fue contestada por la entidad opositora el 18 de septiembre de 2017 (fols. 29 a 33), oponiéndose a las pretensiones de la demanda, esgrimiendo al efecto que el demandante no cotizó 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez, conforme a la normativa vigente que le es aplicable (fols. 29 a 33).

### **1.1. DECISIÓN DE PRIMER GRADO**

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 25 de febrero de 2020 (fols. 74 a 76 con el CD de la audiencia), con la que el cognoscente de instancia absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas por el demandante, absteniéndose de gravarlo en costas.

### **1.2. APELACIÓN.**

La sentencia fue recurrida en apelación por la apoderada judicial del demandante, quien aduce que el actor cuenta con 61 años de edad, cotizó a pensiones desde el año 1979, para un total de 784 semanas cotizadas, y fue calificado con un 53 % de PCL por una enfermedad degenerativa y progresiva, por lo cual le fue reconocido su estado de invalidez. Subraya que es cierto que el demandante no cuenta con 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, ni 26 semanas en el año anterior, pero que se pretende el reconocimiento pensional a la luz de lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990 con base en el principio de la condición más beneficiosa, lo cual no vulnera el principio de sostenibilidad financiera porque el demandante cotizó un importante número de semanas en pensiones. Alega que no existía test de razonabilidad para la aplicación de la condición más beneficiosa al momento de presentación de la demanda, pero que aún así, el demandante lo supera, en tanto no va a poder ejercer ningún tipo de trabajo por su enfermedad lo que le vulnera su mínimo vital, se encuentra en estado de invalidez por una enfermedad degenerativa y catastrófica, justifica la imposibilidad para haber cotizado durante su enfermedad, la que cual le impide el acceso al mercado laboral, además de haber sido diligente en sus actuaciones para el reconocimiento pensional. Apunta que el demandante se encuentra en el régimen subsidiado por estar en el nivel 1 del Sisbén. Finalmente, asienta que debe reabrirse el debate probatorio, si se estima que en el plenario no está probado lo discurrido en el recurso.

Dentro del término concedido para alegar de conclusión, el apoderado judicial de COLPENSIONES alegó que si bien el demandante cumple con el porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral, sólo cotizó 7 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, por lo cual no cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, conforme a la normativa aplicable a la fecha de estructuración, y sin que tampoco cumpla con los requisitos exigidos para la aplicación de la normativa anterior en virtud al principio de la condición más beneficiosa (fols. 87 a 90).

Por su parte, a pesar de que la parte actora aportó alegatos de conclusión (fols. 79 a 81), lo cierto es que los mismos fueron presentados por fuera del término concedido mediante el auto del 9 de junio de 2020, en tanto él mismo precluyó el 18 de junio de 2020, mientras que las alegaciones fueron remitidas el 18 de junio de 2020 a las 5:07 p. m. (fol. 86), es decir, por fuera del horario de los despachos del Distrito Judicial de Medellín de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del CGP, impone tener por extemporánea la alegación, de suerte que no podrá ser tenida en cuenta.

## 2. ANALISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora procesales, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, así como también se revisará la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

### 2.1. PROBLEMA JURÍDICO:

El tema medular de la controversia gira en torno de establecer: ¿Sí cumple el demandante con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990 en aplicación del principio de condición más beneficiosa? Y en caso positivo: ¿Si se causaron los demás derechos deprecados con la demanda?

### 2.2. TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, en tanto no se acreditaron los presupuestos fácticos para acceder a la pensión de invalidez bajo la égida del Acuerdo

049 de 1990 por virtud de la aplicación del principio de condición más beneficiosa, conforme los planteamientos que pasan a exponerse:

### **2.2.1. Pensión de invalidez – condición más beneficiosa**

Teniendo en cuenta el dictamen médico sobre PCL, realizado por Colpensiones el 2 de febrero de 2017 (fols. 15 a 19), en el que se indica que la invalidez se estructuró el 27 de diciembre de 2016, es dable concluir que la norma aplicable al presente caso es la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, la cual señala como requisitos para acceder a la pensión de invalidez de origen común el haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

En consonancia con tal preceptiva, encuentra la Sala que que el afiliado debe cumplir con las 50 semanas en el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2013 al 27 de diciembre de 2016; empero, tal y como lo alega la misma alzada, revisado el reporte de semanas correspondientes (fol. 10), no cuenta con tal densidad de cotizaciones.

Cumple precisar que, si bien es cierto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2358 – Radicación N.º 44596 del 25 de enero de 2017 afina su postura en que puede seguirse aplicando el principio de la condición más beneficiosa siempre y cuando se aplique la normatividad inmediatamente anterior a la fecha en que se estructuró la invalidez, lo cierto es que, el accionante tampoco cumple con las 26 semanas de cotización dentro del año inmediatamente anterior a la estructuración de la invalidez, cómo exigía el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 de manera prístina, conforme la historia laboral aportada (fol. 10), tal y como también lo reconoció la alzada.

Con todo ello, esta Corporación sobre la aplicación de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez, ha tomado distancia de la posición de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, y ha acogido la postura de la Corte Constitucional vertida en la Sentencia SU-556 de 2019, en el sentido de aplicar, en todos los asuntos en que se aborde la aplicación de la condición más beneficiosa en pensión de invalidez, cualquier normatividad en la que se cumpla el número de semanas exigido para dejar causada la prestación económica, sopesando como lo hizo el Alto Tribunal, que en aplicación de la condición más beneficiosa solo es posible aplicar el Decreto 758 de 1990, o cualquier normatividad anterior con la que se hubiere cotizado las semanas exigidas, siempre que quién pretenda acceder a la pensión sea una persona en condiciones de vulnerabilidad por cumplir con el denominado Test de Procedencia, bajo las siguientes 5

condiciones necesarias y concurrentes, en tanto únicamente respecto de estas personas es evidente una afectación grave a sus derechos fundamentales muy a pesar del principio de sostenibilidad financiera y la prohibición de aplicación ultractiva de regímenes pensionales anteriores, en consonancia con el artículo 48 de la Constitución Política, condiciones que no cumple el accionante, conforme a las razones que pasan a exponerse:

**1. Pertenecer a un grupo de especial protección constitucional, además de ser una persona en situación de invalidez, o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo:**

Sobre el punto, exige la Corte Constitucional que: *“Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.”*

En este sentido, no obra prueba alguna de que el accionante esté en condición de analfabetismos, desplazamiento, pobreza extrema, o sea cabeza de familia, y no pertenece al grupo de especial protección constitucional de las personas de la tercera edad, pues la Corte Constitucional ha establecido que *“la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida”*, (T-015 de 2019), que para los hombres es de 73,08 años, conforme el documento del DANE denominado “Indicadores Demográficos según Departamento 1985-2020: Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020”, mientras que el demandante cuenta con 61 años de edad (fol. 25), de hecho, ni siquiera tiene 62 años edad, mínima exigida por la Ley para acceder a la pensión de vejez, según el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 707 de 2003.

Empero, como la enfermedad por la cual está calificado con más del 50 % de PCL, es una enfermedad inconcusamente degenerativa, como lo es el trastorno de Parkinson, conforme al dictamen realizado por Colpensiones el 2 de febrero de 2017 (fols. 19), cumple con la primera condición.

**2. Afectación directa al mínimo vital y, en consecuencia, a una vida en condiciones dignas.**

Requisito que ha de analizarse con posterioridad a la fecha de estructuración del porcentaje de PCL, puesto que versa sobre el deterioro de las condiciones materiales de vida que la persona afronta ante su invalidez, y que no logra acreditarse en el proceso, toda vez que en los hechos de la demanda nada se indica, y no obra en el plenario ninguna elemento material probatorio que así lo acredite, debiéndose tener por no cumplida esta condición.

Cabe precisar, que el hecho de que el accionante ostente la condición de persona en estado de invalidez, no es suficiente para asumir que no se encuentra capacitado para laborar, por cuanto existen diferentes mecanismos normativos, como la Ley 361 de 1997, que facilitan y estimulan su ingreso al mercado laboral, y por ello, el mero estado de invalidez no permite educir con certeza una afectación al mínimo vital. Es más, bajo la hipótesis de que el estado de invalidez implique una absoluta exclusión de la persona del mercado laboral, importa anotar que en atención al principio constitucional de corresponsabilidad, tal situación: *“no implica la liberación apriorística y definitiva de la responsabilidad que, en virtud del principio de solidaridad, le corresponde a la familia, ya que (...) “lo que debe existir es una corresponsabilidad entre el individuo, la familia y el Estado con la finalidad de superar esta situación.”* (C-385 de 2014), es decir, que aún bajo este supuesto debe acreditarse que el sujeto de especial protección constitucional no cuenta con ingresos provenientes de su familia, de la sociedad a través de instituciones de beneficencia, o del Estado, para poder concluir sin asomo de duda que efectivamente se encuentra afectado en su mínimo vital.

Inclusive, ha de asuntarse en este aspecto, que de demostrarse la existencia de una obligación alimentaria a cargo de familiares, podría concluirse que no se configura una vulneración al mínimo vital, tal y como lo indicó la Corte en la sentencia SU-005 de 2018, al asentar que: *“[la accionante] cuenta con la ayuda de sus 8 hijos mayores de edad, quienes tienen para con ella el deber legal de cubrir sus necesidades básicas y un deber de solidaridad derivado de la relación de consanguinidad que los une (...) [por lo cual] no puede ser considerada como una persona en situación de vulnerabilidad.”* De forma que también es relevante probar que el afiliado no cuenta con ayudas familiares para poder acreditar que la denegación de la pensión de invalidez afectación directamente su mínimo vital y vida en condiciones dignas.

### **3. Circunstancias de imposibilidad de cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones del demandante.**

En este punto, debe tenerse en cuenta, como se acabó de indicar, que la discapacidad por sí sola no excluye a la persona en situación de invalidez del mercado laboral, razón por la cual el solo hecho de tener una PCL superior al 50% no es suficiente para dar por justificada la falta de cotizaciones, sino que ha de justificarse en una razón atendible que permita inferir que efectivamente el demandante estuvo imposibilitado para hacerlo.

Hecha la anterior precisión, se advierte que el demandante dejó de cotizar a partir del 14 de abril de 2015 (fols. 10 a 12), más de 20 meses antes de que se estructurara su invalidez el 27 de diciembre de 2016 (fol. 19), y si bien el dictamen concluye que su enfermedad tenía una evolución de 3 años antes de la estructuración (fol. 19), lo cierto es que, ello no justifica para que su enfermedad le impidiera trabajar durante esos 3 años, en tanto se trata de una enfermedad degenerativa, que conforme al criterio médico, apenas le estructuró una invalidez a partir del 27 de diciembre de 2016.

De hecho, si se tiene en cuenta que dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez, el demandante realizó cotizaciones en los meses de julio y agosto de 2014 y abril de 2015 (fol. 12), es claro que sí contaba con una capacidad residual que le permitía laboral, sin que se avizore razón valedera que le impidiera cotizar lo necesario para causar la pensión de invalidez, y por ende, no está probado en el plenario el cumplimiento de este criterio jurisprudencial.

#### **5) Actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.**

Requisito que sí logró acreditarse, dado que el demandante estructuró su invalidez el 27 de diciembre de 2016, solicitó su pensión de invalidez el 1º de marzo de 2017 (fol. 21), e incoó la presente acción judicial el 14 de agosto de 2017 (fol. 6), y siendo que no transcurrieron más de seis (6) meses entre esas fechas, se entiende que actuó diligentemente solicitando el reconocimiento pensional instado en el *sub lite*.

Por todo lo anterior, del cardumen probatorio recabado en el proceso concluye la Sala que no le asiste al demandante el derecho a la pensión de invalidez, ya que a pesar de haber cotizado 300 semanas antes de la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 (fol. 10), acreditando el requisito cotizacional exigido por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, lo cierto es que, al trasluz de los criterios jurisprudenciales trazados por la Corte Constitucional, no cumple el test de procedencia para que le sea aplicable dicha normativa en virtud al principio de la condición más beneficiosa, al no

reunir las cuatro (4) condiciones necesarias y acumulativas, ya enunciadas, siendo que en el *sub examine* sólo se acreditaron dos (2) de las mismas.

Finalmente, habrá de relieves la Sala que resulta improcedente la solicitud impetratoria de pruebas presentada por la alzada por ser evidentemente inoportuna, en tanto el recurso de apelación no es un mecanismo que reviva la oportunidad legal para pedir el decreto o aducir pruebas al proceso, además de ser improcedente, en razón a que las pruebas que ahora deprecia no fueron objeto de pronunciamiento por el *a quo* al momento de decretarse las pruebas en la audiencia prevista en el artículo 77 del CPT y la SS, y sin que la parte actora impugnara tal decisión a través de los medios de impugnación disponibles con que contaba conforme a los artículos 63 y 65 del CPT y la SS, y porque en el *sub judice* tampoco se cumplen los presupuestos legales contenidos en el artículo 83 del CPT y la SS, precepto especial regulador de la práctica de pruebas en segunda instancia.

Ello así, no queda otro camino diferente para la Sala que impartir confirmación a la sentencia de instancia que se revisa en apelación.

## **COSTAS**

Costas en esta instancia a cargo de CARLOS HUMBERTO PEÑA AGUDELO por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, y a favor de COLPENSIONES, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$438.901**, equivalentes a la mitad (1/2) del SMLMV. Las de primera instancia se confirman.

## **3. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia materia de apelación proferida el 25 de febrero de 2020 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.





**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo de CARLOS HUMBERTO PEÑA AGUDELO y a favor de COLPENSIONES, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$438.901**. Las de primera instancia se confirman.


Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.


Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

Se declara surtida la presente decisión y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente


  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

  
CARLOS JORGE RUIZ BOTERO  
Magistrado

  
RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS  
Secretario

Constancia Secretarial

Se deja constancia que las anteriores firmas corresponden a la firma original de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

  
SECRETARIO SALA LABORAL  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN  
SALA LABORAL  
SECRETARIA

**Certifico:** Que la decisión anterior fue notificada por **ESTADOS No. 090** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a través de la página Web a las 8:00 a.m. Medellín, **14 de julio de 2020**

Secretario